

TRAMPAS DE DESIGUALDAD Y CAMBIOS DE RÉGIMEN

PRÓLOGO

JOSÉ LUIS CALVA*

El concepto de “países convergentes” fue aplicado en un importante estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con una connotación especial: para designar a las economías en desarrollo cuyo crecimiento per cápita durante la última década había duplicado, por lo menos, al promedio de los países miembros de la OCDE. Su hallazgo resultó extraordinariamente alentador: 83 países, habitados por cerca de dos tercios de la población del planeta, se ubicaron como “países convergentes” durante la década de 2000. A la vanguardia se encontró un enorme contingente de 49 naciones (China e India incluidas), cuyo crecimiento económico per cápita triplicó, por lo menos, al promedio de la OCDE (*Perspectives on Global Development 2012: Social Cohesion in a Shifting World*, OECD, París, 2011).

Lamentablemente, México no figuró entre esos 83 “países convergentes”. Peor aún, el crecimiento per cápita de la economía mexicana en la década de 2000 fue inferior al promedio de la OCDE. La primera pregunta que surge, parafraseando a Mario Vargas Llosa, es: ¿cuándo y por qué se jodió nuestro país?

Porque durante casi medio siglo México había sido un país convergente, si no con la connotación especial de la OCDE, si en el sentido general de un crecimiento económico per cápita significativamente superior al promedio de los países que hoy son miembros de la OCDE. Durante el periodo 1935-1982, el PIB mexicano creció a una tasa media de 6.1% anual, con un crecimiento acumulado de 1 592% en ese lapso; y el PIB per cápita creció a una tasa media de 3.2% anual, con un crecimiento acumulado de 348%, de manera que el PIB per cápita casi se quintuplicó en 48 años.

Pero desde el arribo de la tecnocracia neoliberal al poder, con Miguel de la Madrid como presidente, la magia del crecimiento se perdió: durante tres

* Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.

décadas y media de experimentación neoliberal (1983-2017), el PIB mexicano apenas creció a una tasa media de 2.3% anual; y el PIB per cápita a una tasa media de 0.7% anual, con un crecimiento acumulado per cápita de apenas 28.6% durante 35 años, lo que prácticamente significó tres décadas y media perdidas para el desarrollo.

El “milagro económico mexicano”, como llegó a denominarse el crecimiento económico acelerado del periodo 1935-1982, no fue obra de la mano invisible del mercado, sino de una estrategia de desarrollo económico basada en un fuerte intervencionismo del Estado: como promotor del crecimiento sostenido del PIB y del empleo mediante políticas macroeconómicas (monetaria y fiscal) contracíclicas; como regulador del comercio exterior, de la inversión extranjera, del sistema financiero (principalmente bancario) y de los mercados internos de bienes y servicios; como facilitador del desarrollo económico mediante políticas de fomento general (infraestructura hidroagrícola, de comunicaciones, transportes, ciencia y tecnología, etc.), así como de fomento sectorial (agrícola, manufacturero, turístico, etc.); como inversionista en áreas estratégicas (sector energético, banca nacional de desarrollo, transporte ferroviario, etcétera); y como promotor del bienestar social mediante leyes laborales y agrarias e instituciones sociales de educación, salud y servicios básicos. La ideología económica y social de la Revolución mexicana, plasmada en el *contrato social* de 1917, había asignado al Estado estas funciones desechando la ideología liberal del *laissez-faire*, *laissez-passer* que había campeado durante el Porfiriato; aunque fue hasta el gobierno de Lázaro Cárdenas cuando esta estrategia fue plenamente aplicada, dejando atrás también la ortodoxia macroeconómica centrada en el equilibrio fiscal y el control de la inflación, que había estado vigente desde el Porfiriato hasta principios de los años treinta.

En vuelta en U, el pasaje a una era de lento crecimiento de la economía mexicana —durante el periodo 1983-2017— fue un resultado natural de la estrategia económica neoliberal aplicada en México desde tiempos de Miguel de la Madrid, y no un simple efecto de malas o insuficientes acciones de política económica dentro de los límites del modelo neoliberal. Por una parte, la liberalización a ultranza del comercio exterior, del sistema financiero y de la inversión extranjera, así como la severa reducción del intervencionismo gubernamental en el fomento económico general (infraestructura, ciencia y tecnología, etcétera) y en el fomento económico sectorial (agrícola, manufacturero, energético, etcétera) profundizaron la desarticulación interna de la planta productiva (perdiéndose incluso cadenas productivas completas), acrecentaron las desigualdades tecnológicas y de productividad entre los distintos sectores de la economía, y aumentaron dramáticamente el desempleo encubierto en el sector informal de la economía (de baja tec-

nología y productividad). Por otra parte, la ortodoxia macroeconómica que erige el control de la inflación y la “disciplina fiscal” en objetivos prioritarios a ultranza, mutiló el papel contracíclico de la política monetaria y fiscal, así como el papel de la política cambiaria como palanca de la competitividad industrial y del equilibrio de las cuentas externas, trayendo consigo los repetidos *ciclos de freno y arranque* de la economía mexicana, cuyo resultado agregado es un pobre crecimiento anual promedio del PIB y del empleo. (Por el contrario, la historia económica internacional muestra que todos los países de mayor tradición industrial —como Inglaterra, Estados Unidos, Alemania o Japón— basaron sus estrategias de desarrollo en políticas comerciales, industriales y de innovación, así como en políticas fiscales, monetarias y financieras impulsoras del desarrollo. Lo mismo hicieron los países de nueva industrialización, como Corea del Sur y Taiwán; y más recientemente lo han hecho las economías emergentes de desarrollo espectacular, como China e India: véase el volumen 2 de esta colección). La razón es sencilla: las imperfecciones de los mercados, los rendimientos crecientes a escala, los factores institucionales que condicionan el desarrollo y la difusión del conocimiento y la tecnología, la competitividad que deriva del manejo del tipo de cambio, y la función de las políticas fiscal y monetaria en el crecimiento sostenido del PIB y del empleo, están fuera de la visión fundamentalista de mercado. Por eso, el extravío de la economía mexicana de la senda del crecimiento acelerado del PIB y del empleo no es un resultado extrínseco a la estrategia económica neoliberal, sino su resultado intrínseco.

Contra esta explicación, la narrativa neoliberal argumentó —sobre todo durante la primera década perdida para el desarrollo— que el pobre crecimiento económico observado desde el gobierno de Miguel de la Madrid se debió a que los “gobiernos populistas” de Echeverría y López Portillo dejaron a México hundido en la crisis de la deuda; y que la estrategia económica neoliberal aplicada desde tiempos de MMH era la mejor opción (o que “no había de otra”). Sin embargo, las evidencias empíricas nacionales e internacionales no validaban (ni validan) esta narrativa. Es cierto que durante el último tramo de la estrategia desarrollo liderado por el Estado —bajo los gobiernos de Luis Echeverría y José López Portillo— la prudencia que había caracterizado el manejo de las políticas macroeconómicas desde los años treinta hasta 1970, cedió su lugar a severas fallas de manejo macroeconómico (principalmente en políticas cambiaria y fiscal), las cuales abrieron la brecha de divisas en la cuenta corriente de la balanza de pagos, hasta desembocar en la crisis de la deuda externa que estalló en agosto de 1982. Pero también es cierto que había una solución alternativa a esta crisis, y que lo peor fue adoptar la estrategia neoliberal. Teníamos la experiencia —cier-

tamente lejana— de la moratoria de la deuda externa provocada por la Revolución mexicana, que fue mantenida —resistiendo fuertes presiones de los acreedores extranjeros— por el presidente Pascual Ortiz Rubio a principios de los años treinta y continuada hasta principios de los años cuarenta, cuando la deuda fue renegociada por el presidente Manuel Ávila Camacho con fabulosas quitas de cuatro quintas partes de su valor nominal, permitiendo así el desarrollo económico de México (Lorenzo Meyer, “Que regrese don Pascual”, *Excélsior*; 6/1/1988). Situados en la era de la globalización neoliberal, la cercana experiencia de Argentina muestra también que sí había de otra: en diciembre de 2001, Argentina cayó en una crisis de deuda externa más grave que la que estalló en México en agosto de 1982. Al año siguiente de su crisis, la deuda externa argentina representaba el 152.7% del PIB en 2002; mientras que la deuda externa mexicana representaba el 49.2% del PIB en 1983. Pero Argentina se levantó como por arte de magia: durante el periodo 2003-2011, el PIB de Argentina creció a una tasa media real de 6.3% anual (medido en dólares estadounidenses a precios constantes corregidos a paridad de poder adquisitivo: PPA), consiguiendo un crecimiento acumulado de 58% en su PIB per cápita, que creció a una tasa media del 5.2% anual. ¿Qué hizo Argentina para salir del abismo? La clave radicó en su estrategia soberana de reconstrucción y desarrollo aplicada por Néstor Kirchner desde su arribo a la presidencia de ese país en mayo de 2003, la cual arrancó de dos decisiones soberanas: la primera fue salvar al país primero y después servir la deuda externa, previa renegociación con enormes quitas al principal, haciendo así valer la corresponsabilidad de los acreedores en la crisis de la deuda. La segunda decisión soberana fue poner en marcha una estrategia heterodoxa de reactivación y crecimiento económico (para el análisis de esta estrategia y lo que ocurrió después en Argentina, véase el volumen *Estrategias de desarrollo económico* de esta colección).

En contraste, la postura del gobierno mexicano fue pagar a los acreedores aun a costa del hundimiento de la economía real y del hambre de millones de mexicanos, y someterse a los severos programas de ajuste macroeconómico y reformas estructurales prescritos por los organismos financieros internacionales (véase J.L. Calva, *Crisis agrícola y alimentaria en México*, México, Fontamara, 1988). Muchos economistas mexicanos (entre los que me incluyo) cuestionamos esta errónea postura pero fuimos descalificados por el entonces presidente Miguel de la Madrid, quien nos llamó “críticos de cubículo”. Pero Norman Bailey, quien en 1982 era encargado de asuntos económicos del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos —*ergo*, insospechable de ser “crítico de cubículo”—, declaró con motivo del décimo aniversario de la crisis mexicana: “Por razones que realmente no logro comprender, México compró la idea de la iliquidez, que era lo que convenía

a los bancos y a la Reserva Federal, pero no a los deudores”. “En un problema de liquidez el mecanismo de solución es otorgar nuevos préstamos y reestructurar vencimientos; en el estructural se procede a la negociación para reducir las deudas que se consideran impagables al 100%, a través de mecanismos de quitas al principal y reducción en las tasas de interés” (Rosana Fuentes Beraín, “México mordió el anzuelo de los acreedores en 1982: Bailey”, *El Financiero*, 20 de agosto de 1992). Es decir, lo mismo que habían propuesto destacados economistas mexicanos, aduciendo además la corresponsabilidad de los bancos multinacionales y los organismos financieros internacionales en la crisis de la deuda. Pero la tecnocracia neoliberal descalificó esta postura pragmática: mantuvo a toda costa el servicio de la deuda externa y aplicó religiosamente los programas neoliberales prescritos por el FMI y Banco Mundial, simplemente porque concordaban con sus propias posturas neoliberales largamente incubadas.

Desde otra perspectiva, una explicación del lento crecimiento de la economía mexicana observado a partir del gobierno de Miguel de la Madrid ha provenido del Banco Mundial, es decir de una de las instituciones financieras internacionales impulsoras de las políticas económicas neoliberales. En un estudio titulado *La trampa de la desigualdad y su vínculo con el bajo crecimiento económico en México*, elaborado por Isabel Guerrero, Luis Felipe López-Calva y Michael Walton y publicado por el Banco Mundial en 2006, los autores afirman: “La desigualdad y el lento crecimiento son dos de los problemas más importantes que enfrenta México en la actualidad [...] Aquí se argumenta que existe una relación estrecha entre ambos”. Y después de presentar los resultados empíricos de su investigación sobre la concentración del ingreso y la riqueza; los abusos de los poderes dominantes vía precios monopólicos u oligopólicos, o rentas de otras índoles; y la captura de las instituciones reguladoras —o de las instituciones operadoras de políticas públicas— por empresas con dominancias de mercado, sindicatos corporativos y organizaciones agrícolas (sobre todo empresariales), los autores observan que frente a estos poderes fácticos, las políticas públicas pueden sufrir dos tipos de distorsiones: “cuando el diseño de las políticas sirve directamente a intereses poderosos, y cuando los diseñadores de políticas se ven forzados a poner en marcha políticas subóptimas para alcanzar sus objetivos, dado el veto *de facto* de los grupos poderosos a las reformas óptimas”. Y finalmente concluyen: “las instituciones económicas moldeadas por la influencia desigual se ubican en el centro del problema de crecimiento y competitividad que sufre México”.

En la misma dirección analítica, pero como resultado de una investigación mundial sobre “equidad y desarrollo”, el staff del Banco Mundial concluyó: “un nivel elevado de desigualdad económica y política suele crear

instituciones económicas y sociales que favorecen sistemáticamente los intereses de quienes tienen más influencia”, de manera que las desigualdades “tienden a reproducirse en el tiempo y a través de generaciones. Esos fenómenos se denominan ‘trampas de desigualdad’”, y se vinculan con el bajo crecimiento económico, no sólo porque afectan negativamente la formación de capacidades humanas (vía educación de calidad, servicio de salud, etc.), sino también porque cuando las instituciones privilegian intereses especiales y son desfavorables para la mayor parte de los agentes económicos (empresarios pequeños y medianos, profesionistas, campesinos, asalariados y trabajadores por su cuenta), tales instituciones resultan “perjudiciales para la inversión, la innovación y la voluntad de asumir riesgos en que se basa el crecimiento a largo plazo” (Banco Mundial, *Informe sobre el desarrollo mundial 2006. Equidad y desarrollo*, Washington, D.C.). Contrario sensu, “un aumento de la equidad llevará consigo un funcionamiento más eficiente de la economía [...] con los consiguientes beneficios dinámicos sobre la inversión y el crecimiento”.

Obviamente, ninguno de estos estudios del Banco Mundial cuestiona la estrategia económica neoliberal aplicada en México o en otros países. Sin embargo, ambas investigaciones han sido reconocidas —entre las corrientes de aire fresco en el pensamiento económico de los organismos multilaterales— por su contribución a la reflexión sobre los componentes de economía política de la problemática del desarrollo económico. Hay sobradas razones para ello: que las instituciones y las políticas públicas aplicadas en México durante las tres décadas y media de lento crecimiento económico, han servido desproporcionalmente intereses especiales puede ilustrarse con una evidencia sumaria: en 1987, cuando la revista *Forbes* publicó por segunda vez su lista de “billonarios” en dólares (con fortunas de mil millones de dólares o más), México apareció con un “billionario” (la familia Garza Sada, con mil millones de dólares exactos); en 2018 México figuró en la revista *Forbes* con 16 “billonarios”, cuya fortuna agregada ascendió a 139.6 miles de millones de dólares.

En perspectiva histórica, durante el siglo XX tuvimos en México dos transformaciones económico–sociales. La primera fue la Revolución mexicana —analizada en los capítulos de Enrique Semo y Felipe Ávila en este libro— que rompió la trampa de desigualdad del Porfiriato, poniendo fin al liberalismo económico y al régimen dictatorial al servicio de una oligarquía de terratenientes, grandes industriales, comerciantes, banqueros e inversionistas extranjeros; y abrió cauce al proyecto nacional de desarrollo económico liderado por el Estado que cristalizó plenamente durante las grandes reformas del gobierno de Lázaro Cárdenas, trayendo consigo el crecimiento acelerado de la economía mexicana durante casi medio siglo,

la ampliación de la movilidad social y la elevación del bienestar de la mayoría de los mexicanos.

La segunda transformación fue la reforma neoliberal, que significó una vuelta en U hacia el (neo)liberalismo económico, ideado e instrumentado en favor de los intereses de una nueva oligarquía de banqueros, grandes empresarios industriales y de servicios, e inversionistas extranjeros, que trajo consigo tres décadas y media perdidas para el desarrollo y hundió a México en su actual trampa de desigualdad. (De hecho, la reforma neoliberal fue una contrarrevolución silenciosa cuidadosamente preparada. Desde los años treinta —siguiendo el relato de Romero Sotelo en el volumen 19 de esta colección— se había formado una corriente de pensamiento económico neoliberal, integrada por hombres de empresa e intelectuales inconformes con las políticas desarrollistas del cardenismo, con sus nacionalizaciones, su reforma agraria, sus políticas industriales y agrícolas y, desde luego, sus políticas macroeconomías de corte keynesiano. Teniendo como pionero a Luis Montes de Oca, líder de un grupo de intelectuales afines a las doctrinas del neoliberalismo —que había sido formalmente fundado por Friedrich von Hayek y Ludwig von Mises, entre otros, durante el Coloquio Lippmann de París en 1938 (véase el capítulo de Escalante en el volumen 19)—, y como patrocinadores a un grupo de empresarios encabezados por Raúl Bailleres, en 1946 los liberales mexicanos fundaron la Asociación Mexicana de Cultura con el fin de difundir el pensamiento neoliberal en México, y ese mismo año fundaron el Instituto Tecnológico de México, ITM, más tarde llamado ITAM, cuyo objetivo fue claramente anunciado por Bailleres: “vamos a preparar muchachos para que dentro de 30 o 40 años pueden hacer la transformación de un país estatista en un país liberal capitalista” (la cita es textual: véase Romero Sotelo). Y lo consiguieron: el “grupo compacto” de tecnócratas liberales que arribaron al poder con Miguel de la Madrid incluyó a los “muchachos” itamitas de Bailleres (véase el capítulo de Salas-Porrás en el volumen 19 de esta colección). Desde entonces, los objetivos del desarrollo nacional fueron subordinados a los intereses y orientaciones del gran empresariado conservador. Rompiendo *de facto* el contrato social de la Revolución mexicana, el gobierno dejó de representar los intereses de la mayoría de los mexicanos, para asumir el programa y representar los intereses de una nueva oligarquía.

Los costos económicos y sociales del régimen oligárquico neoliberal están a la vista: no sólo extraviamos el camino del desarrollo —con un crecimiento económico per cápita cercano a cero durante tres décadas y media—, sino que también sufrimos un fuerte deterioro del bienestar de las mayorías nacionales, aparejado al incremento de la exclusión y la marginación. Los salarios mínimos perdieron el 69.1% de su poder de compra

y los salarios contractuales en las ramas de jurisdicción federal sufrieron una caída real de 63.2% durante el periodo 1983-2017; más de trece millones de mexicanos emigraron al extranjero en busca de empleos que no encontraron en nuestra patria; se agigantó el empleo informal hasta incluir a 31.9 millones de mexicanos durante el último trimestre de 2017 (el 57.1% de la población económicamente activa); creció dramáticamente el desempleo encubierto (5.6 millones de mexicanos que “no tienen trabajo, ni buscan activamente uno, por considerar que no tienen oportunidad de conseguirlo, pero tienen interés en trabajar”: INEGI); y más de treinta millones de mexicanos cayeron en la pobreza (para estos temas véase el volumen *Políticas de empleo digno y superación de la pobreza* de esta colección). En consecuencia, nos enfilamos hacia una grave pérdida de cohesión social, cuyas manifestaciones son cada vez más alarmantes. Hay que recordarlo: el terrible panorama de inseguridad y delincuencia que padece nuestro país no surgió de la nada: tiene como uno de sus principales caldos de cultivo la estrategia económica neoliberal aplicada en México durante las últimas tres décadas y media, que ha resultado incapaz de generar empleos dignos para sus nuevas generaciones.

Para salir de este túnel oscuro es necesario poner punto final al experimento neoliberal y pasar a una nueva estrategia de desarrollo que asegure el crecimiento acelerado y sostenido de nuestra economía, la reconstrucción de nuestra cohesión social y la esperanza de un futuro mejor para las mayorías nacionales.

Ahora bien, si para romper la trampa de desigualdad del Porfiriato fue necesaria la manifestación violenta de la voluntad popular en la Revolución mexicana (“un estallido de la realidad”, “una comunión de México consigo mismo”, la llamó el joven poeta Octavio Paz en *El laberinto de la soledad*), el reto es ahora romper nuestra actual trampa de desigualdad por la vía pacífica.

Entre las reformas que se han sugerido para que México pueda superar en paz su actual trampa de desigualdad destacan los siguientes cursos de acción: 1) un sistema fiscal redistributivo, basado en impuestos progresivos sobre el ingreso y sobre la propiedad; 2) la elevación de las capacidades humanas a través de un sistema educativo de calidad y de servicios públicos de salud universalistas; 3) un sistema regulatorio que ponga límites a los abusos de los poderes económicos dominantes en diversas esferas de la producción y los servicios, con una gobernanza democrática que evite la captura de los organismos reguladores por los poderes fácticos; 4) una política laboral apegada al mandato constitucional de un salario mínimo suficiente y a las normas de la OIT en cuanto a democracia y libertad sindical; 5) atención focalizada de los grupos sociales más vulnerables y marginados, superando

las insuficiencias del programa Prospera-Oportunidades y los rezagos ancestrales en infraestructuras.

Además, se ha sugerido también que el crecimiento económico acelerado y sostenido es condición *sine qua non* para asegurar la reducción de la pobreza y la desigualdad; al tiempo que la reducción de la pobreza y la desigualdad es, a la vez, condición *sine qua non* del crecimiento económico robusto. Por ejemplo, en su estudio titulado *Reducción de la pobreza y crecimiento: círculos virtuosos y círculos viciosos*, referido a América Latina y publicado en 2006, el Banco Mundial afirma: “el crecimiento económico relativamente débil” y “la pobreza y la desigualdad persistentes” son las dos decepciones en países latinoamericanos. “Que el aumento de los niveles de ingresos mitiga la pobreza, y que el crecimiento económico puede ser más o menos eficaz para lograrlo, es un aspecto bien conocido”; pero “se ha estudiado mucho menos el canal inverso”; “los ataques de amplia base a la pobreza se traducen en mayor crecimiento, que a su vez reduce la pobreza”. En la misma dirección analítica, en su notable estudio titulado *La ineficiencia de la desigualdad*, publicado en 2018, la CEPAL observa que “no sólo en lo social se juega lo social”: para superar la pobreza y reducir la desigualdad es también necesario lograr un mayor crecimiento económico, para lo cual, a su vez, es necesario aplicar desde “una política macroeconómica que vaya más allá de las metas de control de la inflación”, hasta políticas industriales de desarrollo productivo y políticas fiscales redistributivas para la generación de bienes y servicios públicos, que a la vez estimularán el crecimiento económico al reducir las ineficiencias que derivan de la pobreza y la desigualdad.

En otras palabras: la erradicación de la pobreza y la reducción de la desigualdad deben ser concebidas no como algo *extrínseco a la estrategia económica*, sino como algo *intrínseco al correcto funcionamiento de la economía* mediante una nueva estrategia de desarrollo realmente incluyente de toda la población en las tareas y los beneficios del desarrollo. Entre los componentes fundamentales de esta estrategia (ampliamente desarrollados y argumentados en esta colección de libros), permítasenos remarcar, en este contexto, cinco grandes cursos de acción: *Primero*: políticas macroeconómicas contracíclicas para minimizar la inestabilidad en el crecimiento del producto nacional y del empleo. Sólo mediante un crecimiento sostenido de la economía será factible generar los puestos de trabajo suficientes y de mejor calidad para las nuevas generaciones, así como para ir absorbiendo a los excluidos por la estrategia neoliberal.

Segundo: políticas de fomento económico general y sectorial que amplíen y mejoren la infraestructura, impulsen el desarrollo de las ramas productivas estratégicas y estimulen los encadenamientos productivos. Su relevan-

cia deriva de la necesidad de crear sinergias permanentes entre los sectores productivos para asegurar la generación de suficientes empleos dignos; para reconstruir y articular los eslabones de las cadenas productivas, hoy rotas por el creciente componente importado de las exportaciones industriales; y para cerrar nuestras brechas estructurales con el mundo industrializado, impulsando el desarrollo de las actividades económicas tradicionales, pero también las industrias y servicios de alta tecnología, como lo han hecho países exitosos que han partido de un nivel de desarrollo inferior.

Tercero: políticas de educación, ciencia, tecnología e innovación, que contribuyan a la elevación general de la productividad y a la generación de empleos cada vez mejor remunerados, a fin de ir cerrando las brechas—de productividad, ingreso y calidad de vida— que nos separan de los países industrializados o de altos ingresos.

Cuarto: políticas sociales de cobertura universal (educación, salud, pensiones, seguro de desempleo, vivienda digna y equidad étnica y de género, sistematizadas en el volumen *Derechos sociales y Estado de bienestar* de esta colección), combinadas con políticas claramente orientadas a mejorar gradualmente la distribución del ingreso entre los factores de la producción y entre los hogares, lo que implica no sólo un sistema fiscal redistributivo basado en impuestos progresivos sobre el ingreso, sino también una política salarial orientada a mejorar la participación de los salarios en el PIB, además de un sistema regulatorio eficiente de los mercados oligopólicos que ponga coto a los abusos de las empresas dominantes.

Quinto: políticas públicas específicamente orientadas a la atención de los grupos sociales más vulnerables y marginados, las cuales pueden contribuir a romper los círculos viciosos de la desigualdad a través del acceso a los satisfactores básicos, pero también a través de amplios y eficaces programas microeconómicos y microregionales que impulsen la actividad económica local con énfasis especial en la dotación de infraestructuras (caminos, escuelas y clínicas, agua y saneamiento, telecomunicaciones y espacios públicos), así como la productividad, la innovación y los encadenamientos productivos.

En suma: la plena incorporación de todos los segmentos sociales a las tareas y los beneficios del desarrollo no sólo es el camino hacia una sociedad más equitativa y cohesionada, sino también para lograr el crecimiento económico acelerado y la inserción digna de México en la economía internacional. Pero así como la trampa de desigualdad del Porfiriato sólo pudo ser superada mediante el cambio de régimen resultante de la Revolución mexicana, la ruptura de nuestra actual trampa de desigualdad sólo será factible mediante un nuevo cambio de régimen, esta vez por la vía pacífica.